

# ARÉVALO & ARÉVALO ABOGADOS

Bogotá, D.C., 29 DE JULIO DE 2022

DEMANDA ORIGINAL

Señor(a):  
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. (REPARTO)  
E. S. D.

**ASUNTO: PROCESO DECLARATIVO DE MENOR CUANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES CONTRA LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA: E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6**

**DANIEL ARMANDO ARÉVALO RODRÍGUEZ**, abogado en ejercicio, mayor de edad, domiciliado y residente en la Ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.910.983 de Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional número 135.763 del C.S. de la J., obrando en mi condición de apoderado judicial del Señor **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES**, mayor de edad, domiciliado y residente en la Ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.191.373 de Bogotá, actuando en nombre propio, en mi calidad de víctima e hijo del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, quien se identificaba en vida con la Cédula de Ciudadanía No. 17.082.608 del Cocuy, de acuerdo con el poder debidamente conferido y que adjunto con la presente demanda, mediante el presente escrito, con el debido respeto me permito impetrar ante su Despacho el presente **PROCESO DECLARATIVO DE MENOR DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES CONTRA LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA: E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6**, representada legalmente para asuntos judiciales por la Doctora **GIMENA MARIA GARCIA BOLAÑOS**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, con cédula de ciudadanía número 52.212.305 de Bogotá y/o quien haga sus veces, a fin de obtener sentencia mediante la cual y, con base en los hechos, circunstancias, fundamentos de derecho y consideraciones especiales que dentro de la misma expongo, se acceda a las declaraciones y condenas que indicaré en la parte petitoria de esta demanda.

## I. PARTES

- **DEMANDANTE:** Señor **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES**, mayor de edad, domiciliado y residente en la Ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.191.373 de Bogotá, en su calidad de víctima e hijo del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, quien se identificaba en vida con la Cédula de Ciudadanía No. 17.082.608 del Cocuy. Representado judicialmente por el Abogado **DANIEL ARMANDO ARÉVALO RODRÍGUEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la Ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.910.983 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional número 135.763 del C.S.J., tal y como aparece en el poder que se adjunta.
- **DEMANDADOS:** LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6, representada legalmente para asuntos judiciales por la Doctora **GIMENA MARIA GARCIA BOLAÑOS**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, con cédula de ciudadanía número 52.212.305 de Bogotá y/o quien haga sus veces.

## II. HECHOS

1. El Señor **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES** es hijo legítimo del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, conforme al registro civil de nacimiento.
2. El Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, era el único beneficiario en los servicios de salud por parte de **E.P.S. SANITAS S.A.S**, en razón a que el demandante era el cotizante.
3. Ahora bien, en razón al precario estado de salud del **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.** se vio obligado a trasladarse a la Clínica Universitaria Colombia de la ciudad de Bogotá el pasado 12 de abril del año 2020, con síntomas de neumonía multilobar por sars cov 2, de acuerdo a la epicrisis No. 17082608, que allego.
4. No obstante, lo anterior, en el transcurso de su hospitalización su salud empeoró día tras día, donde después de unos análisis y estudios médicos, confirmaron el contagio por el virus COVID 19.

Av. Jiménez No. 8 A - 77 Piso 2 Oficina 206  
Bogotá, D.C. - Colombia  
director@arevaloabogados.com.co  
www.arevaloabogados.com.co

5. Posteriormente, el día 17 de abril de 2020, le confirman al demandante que su señor padre tuvo una caída en el baño por descuido de la Clínica Universitaria Colombia, donde se encontraba bajo su cuidado y además estaba saturando más bajo.
6. Por lo cual, el día 18 de abril de 2020, el **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.** es ingresado a la UCI de la misma entidad, con requerimiento de soporte ventilatorio invasivo, durante su estancia hospitalaria se inició manejo con cloroquina + lopinavir/ritonavir, presentando prolongación del QTC, por lo que se suspendió manejo y continuo en estancia UCI con pronóstico reservado.
7. Sin embargo, el demandante recibió información de su estabilidad con pronóstico reservado, así todos los días en las horas de la mañana, de acuerdo a disposición médica, pero el día 03 de mayo de 2020, la Clínica Universitaria Colombia confirma que debía hacerle la cirugía de traqueostomía, dado que su rehabilitación pulmonar no estaba teniendo avance significativo **A PESAR DE QUE SUS ANÁLISIS DE PRUEBAS PARA COVID 19 YA HABÍAN SALIDO NEGATIVAS.**
8. Así las cosas, se vieron en la necesidad de realizar dicha cirugía el día cierto 04 de mayo de 2020, y le dieron la oportunidad al demandante de visitarlo solo hasta el día 13 de mayo de 2020, fecha en la cual, **LA E.P.S. SANITAS S.A.S TOMÓ LA DECISIÓN DE SACARLO DE FORMA ABRUPTA,** interrumpiendo el avance que tenía en la Clínica Universitaria Colombia, indicando simplemente que no lo podían tener más tiempo en dicha institución, que debía irse a una unidad de cuidado crónico intramural.
9. Egreso que se adelantó el día cierto 14 de mayo de 2020 a **HEALTH & LIFE IPS NIT 900.900.122-7 unidad de Chapinero**, conforme a la historia clínica adjunta, donde lo dejaron aislado, sin comida y de forma descuidada, además lo dejaron en una camilla vieja, sin cuidados prioritarios, y lo peor aún, **NO REMITIERON LA HISTORIA CLÍNICA A LA IPS.**
10. Por lo tanto, **HEALTH & LIFE IPS NIT 900.900.122-7** no tenía el conocimiento del procedimiento a seguir con el paciente q.e.p.d., ni mucho menos el tratamiento médico que debían adelantar, para conservar y mantener su estado de salud; además, el señor padre del demandante no tenía la capacidad de firmar ningún tipo de autorización, ya que el traslado lo adelantaron de forma arbitraria, y sin la aquiescencia del demandante.
11. Así las cosas, **LA E.P.S. SANITAS S.A.S** lo dejan **HEALTH & LIFE IPS** donde no tenían los medios tecnológicos y la infraestructura necesaria, para asistir una emergencia, lo que se evidenció y demostró, cuando el demandante solicitó información sobre el estado de salud de su señor padre q.e.p.d., ya que era imposible tener acceso a la misma, solo hasta el día 19 de mayo de 2020, un funcionario de la citada IPS, salió confirmando que le hacía falta un ecocardiograma, que la Clínica Universitaria Colombia clínica no envió.
12. Además, el citado funcionario salió a explicar el resumen de la historia clínica, confirmando que tiene una anuria edemas y esta supremamente hinchado, confirman que iniciaron a darle medicamento para su desinflamación y la nutrición por sonda, confirma que su corazón está fallando, que está en un esquema de desnutrición, que tiene rectorragia y que le iban a dar orden para una colonoscopia y que ellos no lo hacen en este lugar que deben esperar la orden de la **LA E.P.S. SANITAS S.A.S.**
13. Así mismo, confirma que está anémico y que requiere transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos y que tiene una complicación de su estado general conllevando a un estado crítico y poco favorable, síntomas con los cuales no llegó a la IPS, ya que fue trasladado por negligencia y única autorización por **LA E.P.S. SANITAS S.A.S.**, quien tomó la decisión unilateral de desatenderlo en la Clínica Universitaria Colombia y trasladarlo a la citada IPS donde empeoró desde el minuto cero de su traslado, desconociendo su historia clínica.
14. De tal suerte, que **HEALTH & LIFE IPS NIT 900.900.122-7 unidad de Chapinero** no estaba preparada para este tipo de tratamiento médico, ya que no cuenta con los recursos humanos y ni tecnológicos, y menos en estos casos de pandemia y contingencia de salud a nivel mundial, simplemente **LA E.P.S. SANITAS S.A.S** descuido su atención y lo dejaron a su suerte en una casa llamada "IPS", institución que en ningún momento atendió los requerimientos del demandante, dejando a la familia llena de dudas y desesperanza ante la pérdida de un ser querido sin ningún acompañamiento.
15. Precisando, que fue una cadena de errores en la prestación del servicio médico, además de una de falta experiencia de la IPS, donde el mismo funcionario confirmo que fue apresurada esa remisión y

## ARÉVALO & ARÉVALO ABOGADOS

---

que debían volver a recibirlo en la Clínica Universitaria Colombia, ya que ellos no estaban preparados, que simplemente **LA E.P.S. SANITAS S.A.S** por bajar costos y erogaciones económicas, lo remiten de forma improvisada y repentina a una unidad de cuidado crónico.

16. Con todo lo anterior, y teniendo en cuenta que no lo quisieron remitir nuevamente a la Clínica Universitaria Colombia, y ya con su precaria condición de salud, hasta el día 20 de mayo de 2020 lo remiten a la Clínica Santa María del Lago a las 3:00 am, confirmando que llegó con sangrado, lográndolo estabilizar, pero su estado de salud continúa crítico y se deteriora minuto tras minuto; a las 5:00 pm confirma la Doctora Martha Quintana que no es posible realizar los exámenes, que estos exámenes no los están haciendo, si no hasta el otro día, se comunicaron con el demandante informándole que lograron realizar el examen y que él se encontraba muy mal y su diagnóstico es desalentador.
17. Y conforme a todo lo anterior, el día cierto 22 de mayo de 2020 fallece el señor padre del demandante, con ocasión a la falla medica presentada por parte de la **LA E.P.S. SANITAS S.A.S.**
18. Las citada EPS no brindaron los servicios de salud de forma continua y oportuna, conforme se evidencia de la lectura de las historias clínicas, además el Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.** se encontraba en condiciones manifiestas de indefensión, en razón a su avanzada edad (77 años).
19. En la actualidad, el demandante no ha recibido indemnización y/o reparación integral alguna por parte de los aquí demandados.
20. Como requisito de procedibilidad se agotó el mecanismo alternativo de resolución de conflictos, adelantando la **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** en la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES**, la cual fue **DECLARADA FALLIDA**, por no existir intención conciliatoria por parte de los convocados, conforme a la constancia de **NO CONCILIACIÓN** No. IUC-I-2022-2348365 25319 de fecha 13 de junio de 2022.

### III. PRETENSIONES

**PRIMERA.- DECLARAR** civil y contractualmente responsable, a la convocada: **LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6**, representada legalmente para asuntos judiciales por la Doctora **GIMENA MARIA GARCIA BOLAÑOS**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, con cédula de ciudadanía número 52.212.305 de Bogotá y/o quien haga sus veces, por los daños a la vida, salud, daños materiales y morales, a causa de la muerte del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, a favor del Señor **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES**, mayor de edad, domiciliado y residente en la Ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.191.373 de Bogotá, en mi su calidad de víctima e hijo, con ocasión de la deficiente atención médica y hospitalaria recibida por parte de la convocada, según los hechos consignados en la presente solicitud, debidamente probados.

**SEGUNDA.-** Como consecuencia de lo anterior, se **CONDENE** a la convocada: **LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6**, representada legalmente para asuntos judiciales por la Doctora **GIMENA MARIA GARCIA BOLAÑOS**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, con cédula de ciudadanía número 52.212.305 de Bogotá y/o quien haga sus veces, **A PAGAR:**

- 1.1. Por concepto de **DAÑO EMERGENTE** la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$5.440.000.00 M/L)**, a favor de **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES** en su calidad de víctima e hijo del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, *siendo aquel que corresponde a la pérdida económica por la vulneración o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado y todos aquellos gastos, erogaciones o desembolsos que necesariamente una persona debe hacer con ocasión al daño producido, tales como gastos derivados de los transportes, traslados, gastos servicios funerales, etc*, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha en que se celebró la conciliación.
- 1.2. Por concepto de **DAÑO MORAL** la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$80.000.000.00 M/L)**, a favor de **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES** en su calidad de víctima e hijo del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, *siendo esa lesión a los sentimientos de una persona que causa el padecimiento de orden psicológico, inquietud espiritual y agravio a sus íntimas afecciones, padeciendo aquí el demandante*

*temores, ansiedades, depresiones, perturbaciones de carácter psicológico, estrés que sufre una persona por la muerte de un padre, situación que el aquí demandante no estaba en la obligación de soportar, equivalente a 80 SMLMV, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha en que se celebró la conciliación.*

**TERCERA.-** Se **CONDENE** al demandado en las costas y gastos que se causen en el presente proceso, incluyendo las agencias en derecho a favor del demandante.

## IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

### 1. EN EL ORDEN SUSTANCIAL:

#### 1.1. EN LO CIVIL:

Las decisiones que a diario pronuncian los jueces en Colombia han impuesto una permanente revisión de los parámetros sobre los que se evalúa la conducta de quienes, expertos en una materia, prestan sus servicios y por tanto pueden ser objeto de reclamos derivados justamente de la intervención del profesional. Dentro de las diversas actividades profesionales, la médica genera sin duda un alto grado de sensibilidad social no solo porque ningún miembro de la comunidad está exento de requerir de estos servicios, sino porque los errores o imprecisiones en la prestación de la asistencia médica ponen de inmediato en riesgo la existencia del hombre, pues la salud, definida como el estado de completo bienestar a nivel físico, social y psicológico general<sup>1</sup>, es un recurso al que el sujeto aspira constantemente, y cuya ausencia implica la alteración de la órbita cotidiana del actuar del paciente.

En este contexto, las reclamaciones en torno al desarrollo, la intervención o en general a los resultados del servicio médico, han llevado a que la autoridad judicial establezca parámetros de evaluación que permitan determinar los supuestos en los que efectivamente debe o no resolverse favorablemente un *petitum* indemnizatorio de un paciente-víctima de la prestación de servicios médicos.

Recientemente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento con relación a la actividad que realizan los profesionales en medicina, calificándola como actividad peligrosa. Esta afirmación, en el marco colombiano, generaría un cambio profundo respecto a la comprensión del ejercicio médico, con lo cual se hace necesaria la revisión de la decisión en cuestión a fin de determinar si la misma efectivamente pretendía un cambio de dirección en lo que a la actividad médica se refiere y, con ello, una nueva visión de la responsabilidad médica.

El objeto de este documento entonces es analizar no solo el planteamiento del tribunal de cierre en materia de justicia ordinaria en

Colombia, sino también los hechos que fueron estudio del proceso, y con ellos el contexto en el que se realizó el pronunciamiento judicial.

Con ello se pretende ubicar en su marco real la posición de la Corte en materia de actividad médica, así como precisar el contenido del juicio respecto a las actividades peligrosas en la jurisprudencia actual.

La metodología dogmática, de estudio jurisprudencial y doctrinal, servirá de parámetro para este escrito que, por lo demás, se circunscribe a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que se pretende responder es la siguiente: conforme a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, ¿la actividad profesional médica se rige por los parámetros propios de las actividades peligrosas?

Luego de revisar los presupuestos que identifican como peligrosa una actividad a la luz de la jurisprudencia, se analiza la situación fáctica de la sentencia que inspira el presente documento, para terminar con algunas consideraciones en torno a la situación actual de la responsabilidad médica, conforme a estos nuevos pronunciamientos.

La línea jurisprudencial de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en materia de actividades peligrosas ha estado marcada por el criterio subjetivo de imputación desde la providencia de 1938.

Es decir, la culpa como factor de atribución o respuesta al deber de responder, propio del régimen general de responsabilidad al tenor de lo dispuesto por el [artículo 2341](#) del [Código Civil de Colombia](#), acompaña en la misma medida el régimen de actividades peligrosas

construido a través de las decisiones jurisprudenciales, sobre la base del artículo 2356 del Estatuto Civil de Colombia.

## ARÉVALO & ARÉVALO ABOGADOS

---

No obstante, la culpa como presupuesto de la responsabilidad en materia de actividades peligrosas, conforme la construcción jurisprudencial, desde 1938 ha sido presumida sin admitir prueba en contrario en lo que a la diligencia se refiere.

La actividad peligrosa la explica la Alta Corporación como aquella que:

*(...) aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños,..." (G.J. CXLII, pág. 173, reiterada en la CCXVI, pág. 504), o la que "... debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva in situ [sic] el riesgo de producir una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de ordinario– despliega una persona respecto de otra", como recientemente lo registró esta Corporación en sentencia de octubre 23 de 2001, expediente 6315 .*

En esa medida, por el solo hecho de desarrollar la actividad peligrosa, a modo de ejemplo, la conducción de vehículos, la construcción de obras, la culpa como factor de imputación se presume en una presunción de pleno derecho que no cuenta consagración legal expresa. Lo dicho, por cuanto desarrollada una de las actividades que jurisprudencialmente se consideran peligrosas, y ocurrido un daño derivado de la misma, al reclamante le basta con demostrar judicialmente el desarrollo de la actividad y el daño derivado de ello, mientras que el demandado, frente a quien se presume la culpa, solo podrá defenderse en el terreno de la causalidad probando que el daño se produjo con ocasión de la intervención del elemento extraño —caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho de la víctima—. No podrá, de contera, desvirtuar la presunción de culpa pese a que, se repite, legalmente no existe tal restricción.

Ahora bien, dentro de la construcción jurisprudencial del régimen de actividades peligrosas, cabe resaltar la providencia del 24 de agosto de 2009<sup>7</sup>. En ella, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Civil, reconoció que los daños consecuencia de una actividad peligrosa hacían parte de los casos de responsabilidad objetiva. Ello por cuanto, como se ha señalado, el manejo de la presunción de culpa, sin posibilidad de desvirtuarla con la prueba de la diligencia, transforma el análisis de responsabilidad en un evento en el que realmente está ausente el estudio del comportamiento del presunto autor del daño. Con ello, la Sala Civil modificaba el planteamiento mantenido 50 años atrás.

Con todo, y pese a la honestidad teórica o, a lo sumo, a la armónica estructura del argumento defendido por el fallo del 2009, su vigencia solo alcanzó a cumplir un año. Es así como en providencia del 26 de agosto de 2010<sup>9</sup>, la Sala Civil de la Corte retorna a su postura tradicional que desde la teoría estipula que las actividades peligrosas siguen el régimen original de imputación subjetiva, presunta, pero que en la práctica realmente se construye como un caso de responsabilidad objetiva en el que no se estudia el comportamiento del autor del daño. Ello por cuanto, como se ha señalado, se presume la culpa sin admitir prueba en contrario, restringiendo la defensa del demandado a sede de causalidad.

Las conclusiones de la Corte en punto del régimen de actividades peligrosas encuentran cimiento en el [artículo 2356](#) del [Código Civil de Colombia](#), según el cual, a juicio de la Corte en el último fallo citado, se describen los calificativos de la conducta de un sujeto que, en un sentido amplio, debe entenderse dentro de un accionar culposo cuando "*excediendo sus derechos y prerrogativas en el uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa menoscabo en otras personas o en el patrimonio de éstas*". A partir de este análisis

la Corte, en su construcción de régimen particular, regresa a la atribución subjetiva de responsabilidad en lo que a actividades peligrosas se refiere.

Ahora bien, la decisión del 26 de agosto del 2011 se pronuncia igualmente respecto a la providencia del año inmediatamente anterior que, como se mencionó, reconocía la incoherencia práctica de sostener que el régimen de actividades peligrosas era de imputación subjetiva con presunción de culpa desvirtuable solo con la prueba del elemento extraño. Sobre la misma, indicó la Alta Corporación que:

*"(...) debe precisarse, que la sentencia de casación de 24 de agosto de 2009, expediente 01054-01, contiene una rectificación doctrinaria, tal como aparece en su motivación y la parte resolutive, circunscrita exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico equivocado que le dio el Tribunal al aspecto atinente a la 'conurrencia de culpas' en el ejercicio de actividades peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la Sala referente a que éstas se examinan bajo la perspectiva de una responsabilidad 'subjetiva' y no 'objetiva'".*

En definitiva, a pesar de las críticas doctrinarias e incluso los aislados postulados jurisprudenciales, el régimen de las actividades definidas como peligrosas implica una ventaja probatoria para la víctima que reclama, quien podrá limitar su andamiaje en el proceso a evidenciar la actividad en sí misma y el daño generado con ella, absteniéndose de demostrar el factor de imputación.

**Av. Jiménez No. 8 A – 77 Piso 2 Oficina 206**  
**Bogotá, D.C. – Colombia**  
**director@arevaloabogados.com.co**  
**www.arevaloabogados.com.co**



## **2. EN LO PROCESAL:**

Como quedara expresado en el capítulo de "Procedimiento", es fundamento procesal de esta demanda el Libro Tercero **PROCESOS** Sección Primera **PROCESOS DECLARATIVOS** Título I **PROCESO VERBAL** de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.

### **V. PROCEDIMIENTO**

Se trata de un proceso declarativo con pretensiones de mayor cuantía, derivadas de una **RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL**, procedimiento reglado conforme Libro Tercero **PROCESOS** Sección Primera **PROCESOS DECLARATIVOS** Título I **PROCESO VERBAL** de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.

### **VI. COMPETENCIA Y CUANTÍA**

El conocimiento de la presente demanda es de su competencia Señor Juez, en razón de la naturaleza del asunto, el domicilio de las partes y la cuantía de la misma, la cual, estimamos en **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$85.440.000.00 M/L)**, sin perjuicio, que se incremente en razón de los intereses moratorios, siendo competente para conocer los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá, D.C. en primera instancia de las controversias de este tipo.

### **VII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LOS PERJUICIOS**

Conforme a lo consagrado en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 estimo razonadamente los perjuicios causados por el daño causado a la **VÍCTIMA** en razón al accidente de tránsito en la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$85.440.000.00 M/L)**, la cual, la efectuó bajo la gravedad del juramento, valor discriminado e individualizado de la siguiente forma:

- 1.1. Por concepto de **DAÑO EMERGENTE** la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$5.440.000.00 M/L)**, a favor de **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES** en su calidad de víctima e hijo del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, *siendo aquel que corresponde a la pérdida económica por la vulneración o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado y todos aquellos gastos, erogaciones o desembolsos que necesariamente una persona debe hacer con ocasión al daño producido, tales como gastos derivados de los transportes, traslados, gastos servicios funerales, etc*, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha en que se celebró la conciliación.
- 1.2. Por concepto de **DAÑO MORAL** la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$80.000.000.00 M/L)**, a favor de **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES** en su calidad de víctima e hijo del Señor **JORGE QUINTANA VARON q.e.p.d.**, *siendo esa lesión a los sentimientos de una persona que causa el padecimiento de orden psicológico, inquietud espiritual y agravio a sus íntimas afecciones, padeciendo aquí el demandante temores, ansiedades, depresiones, perturbaciones de carácter psicológico, estrés que sufre una persona por la muerte de un padre, situación que el aquí demandante no estaba en la obligación de soportar, equivalente a 80 SMLMV*, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha en que se celebró la conciliación.

# ARÉVALO & ARÉVALO ABOGADOS

---

## VIII. PRUEBAS

Comendidamente solicito al Señor Juez, se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

### 1. DOCUMENTALES:

1. FRM CONSTANCIA DE **NO CONCILIACIÓN** NO. IUC-I-2022-2348365 25319 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022.
2. FRM CERTIFICACION AFILIACION BENEFICIARIO Q.E.P.D.
3. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN SEÑOR **JORGE QUINTANA VARON Q.E.P.D.**
4. REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO SEÑOR **JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES.**
5. FRM CORREO ELECTRONICO 14 DE MAYO 2020 SOLICITUD HC
6. FRM HISTORIA CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA
7. FRM REGISTROS ASISTENCIALES IPS
8. FRM EVOLUCIONES DE LA ESTANCIA IPS
9. FRM HISTORIA CLINICA SANTA MARIA DEL LAGO

### 2. INTERROGATORIO DE PARTE:

1. A la Señora **GIMENA MARIA GARCIA BOLAÑOS**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, con cédula de ciudadanía número 52.212.305 de Bogotá, conforme al certificado de cámara de comercio de Bogotá, y/o quien haga sus veces, en su condición de representante legal de **LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6**, para que absuelva el interrogatorio que sobre los hechos de la demanda que le formularé o mediante escrito que previamente será presentado en sobre cerrado.

## IX. ANEXOS

Adjunto a la presente demanda la siguiente documentación:

1. Poder debidamente otorgado para actuar.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de **LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6**.
3. Comunicación de la demanda al demandado, de conformidad con lo establecido en la Ley 2213 de 2022.

## X. NOTIFICACIONES

- ✓ **DEMANDANTE: JAMER ALEJANDRO QUINTANA OLIVARES**, mayor de edad, domiciliado y residente en la Ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.191.373 de Bogotá, con dirección de notificación personal: Calle 168 A No.73 A – 96 Int 26 Apto 304 de la ciudad de Bogotá, D.C. Teléfono: 3212232557 **Correo Electrónico** [alejo635@gmail.com](mailto:alejo635@gmail.com)
- ✓ **APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: DANIEL ARMANDO ARÉVALO RODRÍGUEZ**, quien recibirá notificaciones en la secretaria de su despacho o en mi oficina ubicada en la Avenida Jiménez No. 8 A – 77 Oficina 206 de la Ciudad de Bogotá, D.C. Teléfono: 3165202534 **Correo Electrónico** [director@arevaloabogados.com.co](mailto:director@arevaloabogados.com.co)

## ARÉVALO & ARÉVALO ABOGADOS

---

- ✓ **DEMANDADO:** LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. SIGLA E.P.S. SANITAS S.A.S NIT: 800.251.440-6, representada legalmente para asuntos judiciales por la Doctora **GIMENA MARIA GARCIA BOLAÑOS**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, con cédula de ciudadanía número 52.212.305 de Bogotá y/o quien haga sus veces, recibe notificaciones judiciales: Avenida Calle 100 No. 11 B -95 de la Ciudad de Bogotá, D.C. Teléfono (601) 6466060 Correo Electrónico [notificajudiciales@keralty.com](mailto:notificajudiciales@keralty.com)

Ruego al Señor Juez, dar a esta demanda el curso legal que le corresponde y reconocerme personería jurídica.

Del Señor Juez con respecto,

Atentamente,



**Abg. DANIEL ARMANDO ARÉVALO RODRÍGUEZ**  
C.C. No.79.910.983 de Bogotá  
T.P. No. 135.763 del C.S. de la J.